La policía francesa registra la sede de Volkswagen

REUTERS, París

La policía francesa ha registrado las oficinas del grupo Volkswagen en Francia, según informó ayer la Fiscalía de París. La operación forma parte de las investigaciones abiertas en el país galo tras saberse que el fabricante alemán de vehículos había amañado varios de sus modelos con un *software* para reducir sus emisiones de gases durante las pruebas.

Concretamente, la policía registró la oficina principal de Volkswagen en Villers-Cotterets, al noreste de París, y otra oficina de la compañía en Roissy, cerca del principal aeropuerto de la capital francesa. Entre lo incautado hay material informático, según explicó un funcionario de la fiscalía.

Un portavoz de Volkswagen confirmó que la policía francesa había estado en sus instalaciones el pasado viernes. También afirmó que estaba cooperando con las autoridades, pero no quiso añadir más comentarios.

La operación policial forma parte de la investigación preliminar que la Fiscalía de París realiza por sospecha de "engaño agravado" por Volkswagen. Las instalaciones de la compañía alemana también han sido registradas ya en otros países europeos, como Alemania e Italia.

El grupo alemán ha reconocido que 946.092 vehículos en Francia estaban equipados con los motores EA 189, los potencialmente afectados por la manipulación de los datos de emisiones. Esto es casi el 10% de los vehículos afectados en todo el mundo, ya que el fabricante de automóviles ha admitido que 11 millones de vehículos pueden tener el *software* fraudulento. El jueves la empresa anunció que llamará a revisión a 8,5 millones de vehículos en la UE.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una rueda de prensa. / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)

Los servicios públicos entran en el debate transatlántico

BELÉN DOMÍNGUEZ, Bruselas

Las negociaciones sobre el tratado de libre comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la UE y Estados Unidos entran esta semana en la undécima ronda de conversaciones, la primera después de que EE UU cerrara con otros 11 países el acuerdo del Pacífico. Los negociadores de ambos bloques debatirán desde hoy en Miami sobre la reducción de aranceles, la cooperación regulatoria y lo que hasta ahora ha sido uno de los (muchos) puntos polémicos del tratado: los servicios públicos y su posible liberalización.

"Hay ciertos sectores que no son negociables y, por tanto, no formarán parte del Tratado", aseguró el miércoles la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a un reducido grupo de periodistas. Los opositores al TTIP, capitaneados en Bruselas por el fuerte grupo de presión Corporate Europe, aseguran que los servicios públicos como el agua y la educación de la Unión están en peligro pues podrían ser privatizados y gestionados por empresas estadounidenses en caso de que, finalmente, se rubrique el tratado comercial, lo que aún se ve lejano.

La propia comisaria reconoce la urgencia en su rúbrica, y preferiblemente quiere se haga bajo el mandato del presidente Barack Obama. "La Comisión Europea ha preguntado a los Estados miembro si estarían dispuestos a ser más flexibles con las solicitudes estadounidenses en relación con los sistemas educativos", asegura la organización. "La Comisión no obliga a privatizar. Ni siquiera anima a hacerlo", justifica el Gobierno comunitario, que deja el tema en una zona gris.

Ante esta situación, Bruselas ha creado una lista negativa en la que se encuentran sectores "sensibles" como el agua. Esto no quiere decir, sin embargo, que estén blindados a una potencial privatización, sino que en estos sectores "clave" la Comisión dará vía libre a las 28 capitales para que decidan si son susceptibles de ser privatizados o no, según confirma una fuente europea con implicación directa en la negociación. Ambos bloques finalizarán el intercambio de opiniones sobre la cuestión en Miami.

Política nacional

La ONG Greenpeace recuerda aquí que Bruselas se comprometió a restringir los transgénicos —muy extendidos en EE UU— en territorio comunitario. Pero lo que el Gobierno de la Unión ha hecho en realidad es devolver la pelota a los Estados miembros para que sean ellos los que decidan sobre su prohibición o no. Hasta la fecha, 15 países los han prohibido de manera total o parcial en su territorio. España, donde se planta el 90% de maíz genéticamente modificado de toda la UE, no se encuentra entre ellos.

En cuanto al acceso a los mercados, los negociadores pondrán "por primera vez" sus ofertas encima de la mesa de manera simultánea, según fuentes de la Comisión que presumen de haber logrado mejorar la propuesta estadounidense. "Ahora hay el mismo nivel de ambición", dicen. Nueve son los sectores de los que se hablará; automoción, farmacéutica, instrumental médico, cosméticos, informática, químicos, pesticidas, ingeniería mecánica y textil.

Bruselas está completamente a favor de abrir "lo más posible" el mercado pues afirma que "cuando se está completamente abierto, todo va bien", explica una alta fuente en la negociación. La UE, por eso, ha conseguido que EE UU eleve su oferta hasta rondar el 90% de apertura, aunque las cifras exactas aún no han sido desveladas. Lo que aún se desconoce son los sectores que EE UU está dispuesto a abrir, pero a la UE le valdrá, según fuentes europeas, con el del transporte marítimo. "A cambio, Estados Unidos busca más comercio digital", aseguran al tiempo que explican que se trata solo de flujo de datos, y no su protección. "Eso no es negociable porque se trata de un derecho fundamental", reiteran desde la Comisión.

La negociación sortea el mayor obstáculo

La disputa Estado-inversor. El tribunal de arbitraje para que los inversores puedan demandar a los Estados al margen del sistema judicial habitual es el punto más polémico. No se tratará en Miami, a la espera de la nueva propuesta de Bruselas.

Sin textos. La nueva comisiaria europea, Cecilia Malmström, ha hecho un esfuerzo de transparencia al publicar las posiciones de partida de la UE. Pero no habrá textos sobre cómo avanza la negociación hasta el documento final.

A contrarreloj. Las elecciones presidenciales en EE UU, en noviembre de 2016, condicionan el calendario.

Joaquín Estefanía

Austeridad en la Europa intervenida

El nivel de pobreza de los cinco países rescatados es superior a la media de la UE

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o de exclusión social en los cinco países europeos intervenidos (con distintas fórmulas) durante la Gran Recesión es superior a la media de la Unión Europea, según Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comisión. Grecia, con un 36%; Irlanda, con un 29,5%; España, con un 29,2%; Portugal, con un 27,5%; y Chipre, con un 27,4%, son estos casos. Además, cuatro de esos cinco países (excepto Portugal) están entre aquellos cuyo riesgo de pobreza relativa ha subido más en el periodo que va entre los años 2008 y 2014.

De todos ellos es Grecia la cobaya peor tratada en el laboratorio social del doctor Mengele de la austeridad. A sus problemas económicos ya conocidos (el riesgo de pobreza ha crecido casi ocho puntos durante la crisis y conserva un cuarto de la población activa en paro) se le suman ahora las dificultades para hacer frente al aluvión de refugiados que ha llegado a sus playas desde principios del año en curso. De los 710.000 inmigrantes huyendo de la muerte o de la hambruna que han entrado en Europa en 2015, casi 470.000 lo han hecho a través de Grecia. A estas alturas, la UE todavía no ha dado una respuesta colectiva a este asunto, lo que parece difícil de comprender en la parte del mundo con un modelo social más avanzado.

La ucronía consiste en preguntarse qué hubiera pasado si esos países no hubieran sido intervenidos y no hubieran tenido que aplicar medidas de austeridad tan fuertes como las que han sufrido sus ciudadanos. Lo que es seguro es que todos ellos fueron obligados, a cambio de los rescates macroeconómicos o financieros, a ejecutar políticas económicas de la familia de la "austeridad expansiva"(teorizadas por Alberto Alesina y Silvia Ardagna), que decían que, independientemente del nivel inicial de deuda, todo ajuste fiscal que base sus objetivos en reducir el gasto público y vaya acompañado de una moderación salarial y de un proceso de devaluación interna tendrá carácter expansivo.

La "austeridad expansiva" fue puesta en cuestión por el propio FMI cuando en 2012 hizo público un estudio que decía que se habían subestimado los multiplicadores fiscales negativos de la eurozona: los efectos de la austeridad llegaron a estar sobrevalorados en algunos casos en más de un 150% de lo previsto.

¿Por qué después de estos resultados en el incremento del riesgo de la pobreza, en el estancamiento secular, en el incremento de los niveles de deuda pública, en la lentísima reducción del paro, todavía hay quien defienden esas políticas de austeridad? El profesor de la Universidad de Brown (EEUU) Mark Blyth, autor del libro de referencia *Austeridad. Historia de una idea peligrosa* (Crítica), lo explica del siguiente modo: "A pesar de que el FMI haya perdido la fe en la austeridad, esto no significa que sus defensores no estén tratando de encontrar nuevos ejemplos de su (presunto) funcionamiento. Hay demasiadas reputaciones en juego y también es demasiado el capital político invertido como para permitir que unos simples e inoportunos hechos vengan a interponerse en el camino de esta ideología".

press reader Printed and distributed by PressReader PressReader.com + +1 604 278 4604 CONTENT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW